

Ciudad de México, a 24 de julio de 2023

PONENCIA I

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-118/2022 y CNHJ-DGO-145/2022

PARTE ACTORA: JORGE SILVERIO ÁLVAREZ ÁVILA

PERSONA DENUNCIADA: MARISOL CARRILLO QUIROGA

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOISA VIVANCO ESQUIDE

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN

VISTOS para resolver el procedimiento sancionador ordinario al rubro señalado, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, radicado con el número de expediente **TEED-JDC-007/2023** de fecha 14 de julio de 2023, que revocó la resolución emitida el 12 de junio del año en curso por esta Comisión Nacional de Honestidad y justicia en el expediente en el que se actúa.

Parte Actora:	Jorge Silverio Álvarez Ávila
CNHJ o Comisión:	Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley electoral:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley de partidos	Ley General de Partidos Políticos.
Ley de medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Reglamento:	Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Tribunal Electoral Local:	Tribunal Electoral del Estado de Durango

R E S U L T A N D O S

- I. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS.** Que en fecha **01 de junio de 2022**, vía correo electrónico, **ROBERTO RANGEL RAMIREZ** presentó su queja, mientras que **JORGE SILVERIO ÁLVAREZ ÁVILA** presentó la propia el **05 de julio de 2022**, también vía correo electrónico, ambas en contra de la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA**.
- II. DEL DESISTIMIENTO.** En fecha 23 de noviembre de 2022, se recibió vía correo electrónico escrito de desistimiento del C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ, por tanto, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la CNHJ, se emitió acuerdo requiriéndole al actor ratificara su escrito de desistimiento.
- III. Resolución.** El 9 de febrero de 2023, esta Comisión resolvió el expediente **CNHJ-DGO-118/2022 y CNHJ-DGO-145/2022**, en los siguientes términos:

“R E S U E L V E

PRIMERO. Se declaran **Fundados** los agravios de la Parte actora, en los términos de lo expuesto en esta Resolución.

SEGUNDO. Se **CANCELA EL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA de MARISOL CARRILLO HUERTA**.

TERCERO. **Notifíquese** la presente Resolución a las partes, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

CUARTO. **Publíquese** la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.”

- IV. JUICIO DE LA CIUDADANÍA.** Inconforme con lo anterior, el 17 de febrero de 2023, la **C. Marisol Carrillo Quiroga** presentó impugnación en contra de la resolución intrapartidista ante el Tribunal Electoral del Estado de Durango, radicado en el expediente TEED-JDC-004/2023.
- V. DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO.** Que en fecha 22 de abril de 2023, el Tribunal Electoral del Estado de Durango resolvió revocar la resolución dictada por esta CNHJ en el expediente **CNHJ-DGO-118/2022 y acumulado**, ordenando a esta Comisión realizar las gestiones necesarias para restituir a la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA** en el ejercicio de sus derechos como militante de Morena.
- VI. DE LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA.** Que **JORGE SILVERIO ÁLVAREZ ÁVILA**, como parte actora en el presente juicio, inconforme con el fallo anterior, promovió Juicio para la protección de los derechos Político Electorales del Ciudadano ante Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se dictó sentencia en el expediente **SG-JDC-26/2023 en fecha 17 de mayo de 2023, revocando la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Durango.**
- VII. DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO.** Que, en cumplimiento a lo ordenado por la **Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, en fecha 02 de junio de 2023, el Tribunal Electoral del Estado de Durango dictó sentencia en el sentido de revocar parcialmente la resolución dictada por esta H. Comisión en el expediente **CNHJ-DGO-118/2022 y acumulado.**
- VIII. DE LA RESOLUCIÓN DE LA CNHJ.** El 12 de junio de 2023, está Comisión resolvió el expediente **CNHJ-DGO-118/2022 y CNHJ-DGO-145/2022**, en los siguientes términos:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se califica como **GRAVE** la falta cometida por la C. Marisol Carrillo Quiroga, en los términos de lo expuesto en esta Resolución.

SEGUNDO. Se **CANCELA EL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA DE LA C. MARISOL CARRILLO QUIROGA.**

TERCERO. **Notifíquese** la presente Resolución a las partes, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

CUARTO. **Publíquese** la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

QUINTO. **Archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

IX. JUICIO DE LA CIUDADANÍA. Inconforme con lo anterior, el 16 de junio de 2023, la **C. Marisol Carrillo Quiroga** presentó impugnación en contra de la resolución intrapartidista ante el Tribunal Electoral del Estado de Durango, radicado en el expediente TEED-JDC-007/2023.

X. DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO. Que en fecha 14 de julio de 2023, el Tribunal Electoral del Estado de Durango resolvió revocar la resolución dictada por esta CNHJ en el expediente **CNHJ-DGO-118/2022 y acumulado** de fecha 12 de junio de la presente anualidad, ordenando a esta Comisión calificar nuevamente la falta cometida por la ciudadana Marisol Carrillo Quiroga.

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más diligencias por desahogar, la comisión en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Durango procede a emitir la presente resolución.

CONSIDERANDOS

1. COMPETENCIA.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena es competente para conocer del

presente, atento al contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena, 45 del Reglamento de esta CNHJ, y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria.

2. ANTECEDENTES RELEVANTES.

I. DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO. En fecha 22 de abril de 2023, el TEED resolvió revocar la resolución dictada por esta CNHJ en el expediente CNHJ-DGO-118/2022 y acumulado, ordenando a la responsable realizar las gestiones necesarias para restituir a la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA** en el ejercicio de sus derechos como militante de Morena.

II. SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA. Que el **C. JORGE SILVERIO ÁLVAREZ ÁVILA**, promovió Juicio para la protección de los derechos Político Electorales del Ciudadano ante Sala Regional de Guadalajara del TEPJF, en el que se dictó sentencia en el expediente **SG-JDC-26/2023 en fecha 17 de mayo de 2023, revocando la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Durango.**

III. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO. Que en cumplimiento a lo ordenado por la **Sala Regional del TEPJF, en fecha 02 de junio de 2023, el Tribunal Electoral del Estado de Durango dictó sentencia en el sentido de revocar parcialmente la resolución dictada por esta H. Comisión en el expediente CNHJ-DGO-118/2022 y acumulado.**

IV. DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO. En fecha 14 de julio de 2023, el TEED **dictó sentencia en el sentido de revocar la resolución dictada por esta H. Comisión en el expediente CNHJ-DGO-118/2022 y acumulado el día 12 de junio de 2023.**

3. CUMPLIMIENTO

El Tribunal Electoral del Estado de Durango, al resolver el juicio de la ciudadanía **TEED-JDC-007/2023, revocó parcialmente** la resolución emitida por esta CNHJ, el 14 de julio de 2023, en los siguientes términos:

“VI. EFECTOS DE LA SENTENCIA

- a) Se revoca la resolución dictada el doce de junio por la CNHJ en el expediente CNHJ-DGO-118/2022 y su acumulado CNHJ-DGO-145/2022, para el efecto de que la CNHJ, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se le notifique la presente sentencia, califique, **debidamente fundada y motivada**, la falta cometida por la ciudadana Marisol Carrillo Quiroga, y posteriormente a ello, realice la individualización correspondiente, a efecto de que determine la sanción que resulte idónea -conforme al catálogo de sanciones establecido en la normativa interna de Morena- para inhibir ese tipo de conductas, lo anterior, a la luz de la interpretación conforme de las normas legales aplicables.
- b) Asimismo, ante la disponibilidad de diferentes sanciones a imponer, la CNHJ se encuentra obligada **a analizar detalladamente las circunstancias objetivas y subjetivas** en que la actora cometió la falta, para posteriormente determinar de manera fundada y motivada, qué tipo de sanción es la que resulta proporcional, atendiendo a la gravedad de la infracción, el grado de culpabilidad, reincidencia y todas aquellas circunstancias necesarias para individualizar la sanción.
- c) La CNHJ deberá informar a esta Sala Colegiada, el cumplimiento a este fallo dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que ello ocurra, debiendo acompañar las constancias respectivas.”

Por tal razón, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, se calificará nuevamente la falta cometida por la C. Marisol Carrillo Quiroga, consistente en la asistencia a un evento político convocado por un partido político diverso a MORENA durante una campaña electoral, conforme a los parámetros indicados en la ejecutoria de mérito, considerando para efectos de la presente resolución como parte actora a Jorge Silverio Álvarez Ávila.

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO.

De acuerdo a lo señalado en el punto que antecede, la litis que ahora nos ocupa, se constriñe a resolver sobre la calificación de la falta consistente en la asistencia a un evento político convocado por un partido diverso a Morena, durante campañas electorales cometida por la C. Marisol Carrillo Quiroga y la individualización de la sanción que resulte adecuada.

5. DECISIÓN DEL CASO.

Se **CANCELA EL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA DE LA C. MARISOL CARRILLO QUIROGA** en

concordancia con el artículo 129, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

5.1 JUSTIFICACIÓN.

La presente resolución resolverá en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Durango en el expediente **TEED-JDC-007/2023** calificando nuevamente la falta cometida por la denunciada consistente en acudir a un evento político convocado por partido político diverso a Morena, durante una campaña electoral, e individualizando la sanción en consecuencia de su actuar, con el fin de determinar cuál es la sanción que resulta adecuada.

CUESTIÓN PREVIA

Esta CNHJ estima que **existe un principio constitucional por el cual se postula un deber de lealtad de los militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos hacia los demás afiliados o militantes del mismo partido político**, del cual deriva una prohibición de participar en más de una contienda intrapartidaria y/o ser registrado a una candidatura de elección popular por diverso partido político sin que medie una coalición o candidatura común.

De una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 59; 115 fracción I párrafo primero y 116 fracción II párrafo segundo de la Constitución General de la República, se puede reconocer la existencia de dicho principio constitucional (**deber de lealtad¹ hacia los comilitantes o cofiliados**), tan es así que, dicho principio se desarrolla o instrumenta en la legislación secundaria mediante la prohibición de la doble afiliación de una persona a partidos políticos ya registrados o en formación según reza el artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos. En igual sentido, el párrafo 6 del artículo 87 de dicha Ley General refiere la existencia de una restricción para que algún partido político registre a un candidato de otro partido político sin que exista una coalición

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también manifiesta este principio de deber de lealtad partidista, al establecer que existe una prohibición absoluta para que las y los ciudadanos participen simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos, sin

¹ Deber que ha sido reconocido por la Sala Superior en el SUP-JDC-557/2018

que entre ellos medie convenio para participar en coalición, lo anterior de conformidad con su artículo 227, párrafo 5.

En este sentido, no es desconocido para esta CNHJ que tal disposición también encuentra sustento en las Leyes del Estado de Durango (Entidad Federativa en la que ocurrieron los hechos denunciados), puesto que dicho principio se encuentra establecido particularmente en el artículo 48 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, que establece la prohibición de doble afiliación.

Asimismo, el artículo 176 fracción V, del citado ordenamiento, dispone que ninguna persona podrá participar de forma paralela en proceso de selección interna de candidatos a puestos de elección popular por diferentes partidos, por lo que en ese sentido, se hace prevalecer el **Principio de Lealtad de la Militancia Partidaria**.

Como se puede advertir de lo anterior, tanto en el orden federal como en el local del Estado de Durango, tal principio constitucional de lealtad hacia la militancia partidaria tiene un significado definitorio y fundamental del sistema democrático nacional. **Dicho en otros términos está prohibido el transfuguismo político** que puede presentarse con la participación en distintos procesos internos de selección de candidaturas, en la aceptación de esas candidaturas **o apoyar la candidatura de un partido político distinto a Morena, como lo es, asistir a eventos políticos** como se prevé en la normativa interna.

Luego entonces, la vulneración de dicho principio es inadmisibles por su carácter sustancial y dada la interdependencia de ese deber de lealtad hacia la militancia con el ejercicio del derecho de asociación partidaria y el derecho de los otros contendientes a participar en procesos electorales auténticos es que su vulneración es determinante para el desarrollo de un proceso electoral constitucional y democrático.

Es así, que el transfuguismo político trae como consecuencia una vulneración directa al principio de equidad en la contienda electoral. En ese sentido, el catedrático Javier García Roca² ha señalado que la expresión transfuguismo, define a las personas que pasan de una ideología o colectividad a otra; a los titulares de un cargo público que no lo abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato, y al militar que cambia de bando en tiempo de conflicto, admitiendo de forma figurada que la lucha partidaria tenga a menudo algo de conflicto bélico no declarado e incruento.

² Santolaya Machetti, Pablo y Corona Ferrero Jesus Ma., *Transfuguismo Político, Escenarios y Respuestas*, Pamplona, Thomson Reuters, 2009, pp. 40-43 y 70-72.

A partir de una disección analítica, el transfuguismo se compone por los siguientes elementos:

- a) Una ruptura injustificada por un cargo público representativo;
- b) La disciplina de partido propia de un determinado grupo político;
- c) La actuación de un órgano local;
- d) La votación en contra del resto de los cargos que fueron elegidos por los ciudadanos en una misma candidatura, y
- e) Las consecuencias indeseables en las relaciones entre mayoría de gobierno y minorías de oposición.

Por tanto, un voto inesperado, la aceptación de competir por otra opción partidista, política o éticamente injustificable explica habitualmente el acto del transfuguismo, o apoyar la candidatura de un partido político distinto, pero puede plasmarse en otras conductas, como lo es un cambio de grupo o el abandono del grupo originario y la ausencia deliberada e injustificada en una votación; es decir, la “traición”, a la formación política con la que se comulga, en el caso a Morena.

En este sentido, es claro que este tipo de conductas no puede ser permitido dentro de Morena, **pues la conducta de cualquier militante debe orientarse a apuntarnos como un movimiento político fuerte, sólido y unificado, en el sentido de evitar que cierta parte de la militancia pueda llegar a interferir indebidamente en el funcionamiento de nuestra organización a la cual realmente no pertenecen, e igualmente, ejercer ciertos derechos estatutarios reservados a quienes sí comparten nuestros principios, ideología y/o programa político.**

Así, puede decirse que el andamiaje constitucional de la institucionalidad, disciplina o lealtad partidista –que en el caso se aprecia tutelado en las normas constitucionales ya citadas y que corresponde a lo que se ha identificado como lealtad hacia la militancia- y que a nivel legal cobra forma a través de prohibiciones de doble militancia y transfuguismo político en períodos electorales **o apoyar la candidatura de un partido político distinto, parte de entender que no se trata simplemente de una discrepancia entre el militante y su agrupación política.**

Lo anterior, en razón de que su rechazo se apoya en que atomiza y diluye la institucionalidad de las opciones políticas, con los consecuentes efectos perniciosos que esto representa para el funcionamiento del sistema –que cuando funciona bien para el bien

de todos- y, destacadamente, **falsea la confianza de los electores en tanto que no hay certeza del programa político y plataforma ideológica que representa y quiere representar de quién se trate**, en el caso, los valores y postulados que refrenda Morena.

Así entonces, es claro que existen principios, valores y posturas políticas plenamente identificables que nos distinguen de todas las demás opciones políticas, de ahí que se encuentre sancionada esa conducta.

En el caso en concreto, es menester señalar que **los militantes de Morena, deben abstenerse de asistir a eventos de carácter político-electorales, distintos a los de este partido o sus aliados**; lo anterior en atención a que se torna como un apoyo a otro partido político, máxime si la asistencia es durante un proceso electoral en el que participa Morena.

En ese sentido, no es tema de controversia que la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA, es responsable de asistir a un evento político convocado por una fuerza política contraria a Morena**, ello en los términos explicados en los párrafos que anteceden, tal conducta implicó la transgresión de las normas internas de nuestro partido que prohíben asistir a un evento convocado por un candidato postulado por un partido político diverso a Morena, sin pasar desapercibido, que estos hechos denunciados ocurrieron durante el transcurso de un proceso electoral local en el Estado de Durango.

Por otro lado, la libertad de asociación se encuentra regulada por el artículo 35, fracción III de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos

Art. 35.- Son prerrogativas del ciudadano:

(...)

III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

(...)

A su vez, en los artículos 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se identifica la dimensión política del ejercicio de este derecho humano³.

³ En el numeral 1 del artículo 16 de la Convención Americana se dispone: "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole".

Por su parte, la Declaración de Principios establece que las y los integrantes de Morena regimos nuestra conducta personal y colectiva bajo los principios éticos y valores humanos que se enuncian a continuación.

“Las y los transformadores deben transformarse a sí mismos. Todas y todos los militantes de morena tienen el deber de llevar a cabo un trabajo permanente de formación ética y política, tanto participando como organizadores, expositores o asistentes a las actividades del Instituto Nacional de Formación Política, como organizando acciones de información, difusión, reflexión y formación para el conjunto de la población. Morena difundirá y observará los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.”

En ese tenor, la ciudadana **MARISOL CARRILLO QUIROGA** se encuentra obligada a acatar las disposiciones establecidas en los documentos básicos en virtud a que el artículo 4 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos establece que un militante o afiliado es el ciudadano o ciudadana que en pleno ejercicio y goce de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normativa interna.

En tanto que el artículo 3 del Reglamento de Afiliación de Morena establece que solo se podrán afiliar a este instituto político las mexicanas y mexicanos dispuestos a luchar por un cambio verdadero y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha.

Por lo que de estos artículos puede decirse que cuando una ciudadana o ciudadano se afilia a nuestro partido político en uso de su derecho constitucional de asociación, expresamente se obliga a cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa interna de Morena, entre ellas queda sujeta a la imposición de una exigencia de lealtad hacia el partido.

Cabe resaltar que, el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos⁴ prevé que los institutos políticos deberán contar con una Declaración de Principios que deberán ser congruentes con el Programa de Lucha y Estatuto, en ese sentido el artículo 35 de la ley en comento, establece que tanto la declaración de principios, el programa de acción, así como los estatutos conformarán los principales documentos del partido. Por su parte, el artículo 37 de esta Ley General expresa una serie de exigencias, mismas que deberán reflejarse en la Declaración de Principios, entre ellas, por ejemplo los principios ideológicos de carácter político, económico y social que ostentamos como partido político.

⁴ En adelante LGPP.

En este mismo orden, el artículo 23 inciso c) de la LGPP establece la facultad de este instituto político para determinar su organización interior y regular la vida interna, misma que se ejerce para el acto de vincular la actividad realizada por sus militantes, **en su trabajo, estudios y hogares** a los documentos básicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 6 inciso k) del Estatuto. Finalmente es importante destacar que el artículo 41 incisos a) y b) de la LGPP establece que los militantes de los partidos políticos están obligados a respetar y cumplir los documentos básicos de los partidos políticos.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis IX/2005 titulada **“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU INTERPRETACIÓN CONFORME”**⁵ con la finalidad de resaltar que al ser militantes de Morena se debe de respetar su normatividad.

De los preceptos en cita se advierte que la afiliación de la denunciada al partido político Morena incide en el ejercicio de sus derechos como militante toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide que las y los Protagonistas del Cambio Verdadero se presenten en actos proselitistas en apoyo a otras opciones políticas a las postuladas por este instituto político.

Esto es así porque dichas normas persiguen la finalidad de que las personas dirigentes y militantes se conduzcan con apego a los intereses, principios y plataformas electorales del partido político en el que militan, de modo que no se aprovechen de su calidad de dirigente o, en el caso particular, ser diputada emanada por este partido político para responder a intereses de un partido político diverso a Morena. Esto es así, porque la norma busca privilegiar los intereses del partido político sobre los beneficios o intereses personales de alguno de sus dirigentes o militantes.

Es así que los preceptos normativos en cita, buscan que los integrantes de un partido político tengan la misma ideología, con el fin de alcanzar objetivos comunes y específicos, que no se vean afectados por intereses individuales.

En este sentido, el artículo 6º, inciso k) en relación con los artículos 4º y 4º Bis del Estatuto de Morena buscan que la militancia asuma el deber de desempeñarse en todo momento como integrantes de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad, con la finalidad de preservar la imagen pública de la formación política a la que pertenecen, acorde a la

⁵ Consultable en:

<https://www.te.gob.mx/USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IX/2005&tpoBusqueda=S&sWord=ESTATUTOS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%C3%8dTICOS,.ES,ADMISIBLE,SU,INTERPRETACI%C3%93N,CONFORME>

filosofía, ideología, principios y/o corrientes de pensamiento que postula nuestro partido político.

De ahí se estima que la parte denunciada tiene la obligación de desempeñarse en toda actividad pública como militante de Morena.

Pues solo de esta manera, se garantiza que Morena cuente con dirigentes y militantes leales y comprometidos con nuestros principios e ideologías, para poder cumplir con las finales previstas en el segundo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las derivadas de las estrategias políticas y electorales aprobadas por los órganos partidistas.

Por tanto, una vez expuesto lo anterior, se procede a realizar el análisis y precisión de las consideraciones respecto del caso puesto a consideración de esta autoridad intrapartidista.

- **RESPECTO AL BIEN JURÍDICO TUTELADO.**

Ahora bien, en atención a lo señalado con anterioridad, resulta menester puntualizar que el bien jurídico tutelado en el caso en concreto resulta ser el **Principio de Lealtad de la Militancia Partidaria**.

En esa guisa, respecto al deber de lealtad, la Sala Superior ha señalado que la fidelidad y lealtad al partido político impone a las personas que ingresan a un partido en ejercicio de su libertad de asociación, adquieren el compromiso de cumplir con las normas estatutarias inherentes a los propósitos de la asociación política.

Por tanto, la conducta de los militantes de los partidos políticos queda sujeta a los deberes que impone la referida lealtad al partido, por tanto, si alguna conducta realizada por sus militantes encuadra en alguna de las causas de sanción o expulsión del partido, las mismas deberán seguir los procedimientos previamente establecidos a fin de analizar si las conductas son constitutivas de infracción.

Asimismo, ante tal análisis, debe de considerarse el derecho a la autoorganización y la de la facultad disciplinaria partidista fundadas en los artículos 9, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39, 40, 41 y 42 de la Ley General de Partidos Políticos, que disponen los documentos donde se establecen los deberes y obligaciones de los militantes. Lo anterior, sin perjuicio de que **cada instituto político ejerza su potestad disciplinaria anclada en la facultad de autoorganización**.

En esa guisa, los artículos 6, inciso f), e i), y 9 del Estatuto de Morena, estatuyen lo siguiente:

“(...)

*Artículo 6º. Las **personas** Protagonistas del Cambio Verdadero tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones):*

...

*f. **Defender** en medios de comunicación, redes sociales y otros medios a su alcance a las personas Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes de nuestro partido, **así como postulados**, decisiones, acuerdos y planteamientos **que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques de nuestros adversarios.***

...

*i. **Participar en las actividades de formación política, movilización y organización sobre distintas causas en favor de la transformación a las que convoquen las dirigencias y liderazgos del partido.***

(...)”

“(...)

*Artículo 9º. En Morena habrá libertad de expresión de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos, corrientes o facciones, **y las y los Protagonistas del Cambio Verdadero velarán en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la transformación del país**, acatarán las decisiones adoptadas por los órganos estatutarios, respetarán las decisiones mayoritarias y la estrategia electoral.*

(...)”

En esa tesitura, como ha sido señalado con anterioridad, toda persona que se afilia a un partido político sabe que determinadas conductas pueden constituir infracciones y ser objeto de disciplina partidista, como el quebrantar el deber lealtad y fidelidad si realiza actos contrarios a los mismos.

Por tanto, en relación al referido principio, los militantes aceptan modular su conducta con la finalidad de salvaguardar los fines propios de organización a la que pertenecen, todo esto, en el marco de la legalidad de la asociación política y considerando que la militancia

es una cuestión voluntaria que conlleva un compromiso y responsabilidad hacia los integrantes del partido en el cual militan, sus autoridades y normativa interior.

En consecuencia, resulta razonable que la norma estatutaria que establece como conducta constitutiva de infracción **la realización de actos de deslealtad** al partido político al que pertenecen, está dirigida a inhibir conductas que atenten en contra del derecho de los demás afiliados, lo anterior, so pena de ser considerado como un acto antiestatutario, esto, ya que la pertenencia a un partido político impone una mínima exigencia de lealtad.

Una vez establecido lo anterior, se procede a realizar la calificación e individualización de la sanción que ha quedado acreditada, que transgrede el Estatuto, la Declaración de Principios y el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se procederá en los puntos siguientes a la calificación e individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se precisan.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Para ello, esta CNHJ se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento, el cual dispone que para la individualización de las sanciones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra.
- La conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado o las normas que se dicten con base en él.
- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.
- Las condiciones socioeconómicas de la o el infractor.
- Las condiciones externas y los medios de ejecución.
- La reincidencia.
- En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la realización de la infracción.

En esta tesitura, una vez acreditada la infracción cometida por la C. Marisol Carrillo Quiroga, la autoridad partidista debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, corresponde proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En esta perspectiva, para imponer la sanción, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el sujeto infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción se adecue a la transgresión cometida.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán los elementos necesarios para calificar la falta y para individualizar la sanción, ello de conformidad con el referido artículo 138 del Reglamento.

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra.

Por lo que hace a la gravedad de la responsabilidad en que incurrió la persona denunciada, en principio, es importante señalar que, se tiene por actualizada una falta sustantiva que pone en peligro los valores sustanciales protegidos por la normatividad interna de Morena, así como los objetivos consistentes en lograr una **Transformación y un Cambio de Régimen**, a través de una forma de hacer política que nos distinga de otras opciones políticas, objetivos que se encuentran tutelados en la Declaración de Principios, así como en los artículos 2 inciso a), 6 incisos f), e i) y 9) inciso de la norma estatutaria.

Lo anterior, al realizar actos que representaron un daño directo y efectivo al bien jurídicamente tutelado relativo al Principio de Lealtad de la Militancia Partidaria, al realizar acciones políticas contrarias a los señalados objetivos, filosofía, ideología, principios y corriente de pensamiento postulado por este partido político.

Por tanto, resulta razonable que, entre una de sus obligaciones como militantes de la hoy denunciada, se encontraba modular su conducta con la finalidad de salvaguardar los fines propios de la organización.

Así, se considera que los militantes asumen el deber de preservar la imagen pública de este partido político, así como atender la obligación voluntariamente adquirida de colaboración positiva para favorecer el adecuado funcionamiento y llevar a cabo las

acciones para lograr los objetivos principales relativos a la transformación del País, considerando en todo momento los principios que rigen el actuar de los militantes.

En este sentido, la denunciada faltó a su responsabilidad relativa a evitar que se desarrollen y realicen conductas que impliquen la subordinación, o alianzas con representantes del régimen neoliberal y de sus partidos políticos como lo es la Coalición “Va por México”.

Asimismo, se violentó nuestra Declaración de Principios en la parte relativa a que los protagonistas del cambio verdadero tienen el deber de impulsar la revolución de las conciencias, así como que nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de honestidad, alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político. Ello porque los integrantes de nuestro partido político deben tener presente que, en el quehacer cotidiano son portadores de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la satisfacción de intereses egoístas.

A su vez, se vulnera el Programa de Lucha que señala que Morena llama a cambiar el Régimen que representan los partidos tradicionales por la vía pacífica y electoral.

Debido a lo anterior, es válido concluir que la denunciada viola los valores, principios, responsabilidades y obligaciones antes establecidos, con lo que se violenta, a su vez, a Nuestro Movimiento y sus Militantes.

Así, se determina que la denunciada vulneró lo dispuesto en los artículos 2 inciso a).; 6 incisos f) e i) y 9 del Estatuto de Morena; así como la Declaración de Principios de Morena.

Los postulados antes referidos tienen por objeto evitar actos que impliquen conductas consistentes en la participación en un evento partidista en campañas electorales convocado por un partido político diverso a Morena, y que buscan que nuestra militancia ejerza de manera diferenciada la política, a fin de distinguirnos de los partidos políticos de los regímenes del pasado.

Aquí, es importante hacer énfasis en que como ya fue mencionado, nuestro partido tiene como intereses superiores, la transformación democrática del país, lograr un cambio de régimen, así como el impulsar la revolución de las conciencias, en esa guisa, el propósito constitucional de los partidos políticos, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática, ello de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal; siendo uno de los medios por el cual se cumple dicho fin constitucional, la postulación de las candidaturas.

En ese sentido, no puede perderse de vista que es mediante las postulaciones de cargos de elección popular y un posterior triunfo electoral, que el partido político Morena, puede llevar a cabo sus fines superiores, siendo estos, la transformación democrática del país, el lograr un cambio de régimen e impulsar la revolución de las conciencias, mismos que empatan con su fin constitucional.

De ahí que, la conducta de la **C. Marisol Carrillo Quiroga**, la cual consistió en acudir a un evento político convocado por un partido distinto a Morena, implicó que dicha ciudadana de manera pública, no apoyara a los candidatos de nuestro partido en un proceso electoral en curso, pues con su actuar manifestó su apoyo a un candidato de un partido político diverso, en perjuicio de nuestro partido, obstaculizando de esta manera la consecución de nuestros fines superiores.

Por tanto, con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por nuestra normatividad.

Es así que, como ya se estableció, **la denunciada realizó actos que implicaron el acudir a un evento partidista convocado por un partido político diverso a Morena y de esta forma, no apoyar públicamente a los candidatos de nuestro partido en un proceso electoral constitucional de carácter municipal y estatal, en detrimento de los candidatos postulados por Morena.**

b) La Conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado

Al respecto, resulta indispensable suprimir este tipo de conductas, puesto que el daño que se causa constituye un detrimento en el valor de nuestro partido y nuestra militancia ante la ciudadanía en general, con lo que ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados por las normas internas de Morena.

Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta descrita vulnera directamente los principios, postulados, responsabilidades y obligaciones que se encuentran contenidos en nuestros documentos básicos.

En ese tenor, las faltas cometidas son sustantivas, toda vez que transgredió directamente el contenido de los documentos básicos, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios referidos.

Por lo anterior, este tipo de conductas deben ser reprochadas a tal grado que se inhiba su realización y con ellas se suprima cualquier acción que atente en contra de los postulados de Nuestro Partido.

c) Singularidad o pluralidad de la falta.

La falta es singular, porque se trata una conducta consistente en la asistencia a un evento convocado por un partido político diverso a Morena durante el proceso electoral 2021-2022 en el Estado de Durango.

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción.

Estos aspectos quedaron acreditados de conformidad con la resolución primigenia, esto es, la ciudadana Marisol Carrillo Quiroga acudió a un evento partidista convocado por un partido político diverso a Morena durante el proceso electoral 2021-2022 en el Estado de Durango, conducta que además trascendió a los medios de comunicación, como lo es la fotografía mediante la cual se ve a lado de una persona del sexo masculino al que se describe como “Esteban Villegas” entonces candidato postulado por la Coalición Va Por México, fotografía tomada durante dicho evento político convocado por la Coalición Va Por México, que a manera de ilustrarla se señala a continuación.



e) Las condiciones socio económicas de las infractoras.

En el caso, no resulta necesario determinar tales condiciones puesto que no se trata de un procedimiento en el que se encuentre involucrada una sanción que implique la imposición de alguna multa.

f) Las condiciones externas y los medios de ejecución.

En la especie, debe indicarse que la asistencia a un evento político fue efectuada por la denunciada durante un evento político convocado por un partido político diverso a Morena durante el proceso de selección de candidaturas de Morena en el Estado de Durango para el proceso electoral 2021-2022, es una acción prohibida por el Estatuto y el Reglamento.

Lo que revela un aspecto volitivo para acudir por propia decisión de la parte infractora para movilizarse en favor de causas ajenas a este partido político, a sabiendas de que, en su calidad de militante y diputada emanada de nuestro partido, tenía un deber reforzado de mantener la unidad y cumplir con la normativa intrapartidaria.

g) La reincidencia.

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de esta CNHJ, se desprende que no ha sido sancionada la denunciada anteriormente.

h) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la realización de la infracción.

En el presente caso, el daño causado con la conducta infractora no resulta de carácter económico, sino de carácter sustancial al bien jurídicamente tutelado relativo al Principio de Lealtad de la Militancia Partidaria, al realizar acciones políticas contrarias a los señalados objetivos, filosofía, ideología, principios y corriente de pensamiento postulado por este partido político, pues al haber acudido a un evento proselitista convocado por otra fuerza política, esto implicó de manera abierta que no apoyara a nuestra entonces candidata a la gubernatura de Durango, beneficiando de esta manera a la candidatura de otro partido político, lo que obstaculiza de manera directa al bien jurídico tutelado por la norma consistente en lograr una Transformación y un Cambio de Régimen.

i) Forma y grado de intervención del infractor

La denunciada acudió de forma personal y voluntaria al evento convocado por otro partido político el día 27 de mayo de 2022, de tal manera que el grado de su intervención en la falta acreditada, es directa y plenamente reprochable a su persona.

j) Comisión dolosa o culposa de la falta

La denunciada acudió por propia decisión para movilizarse en favor de causas ajenas a este partido político, a sabiendas de que, en su calidad de militante y diputada emanada de nuestro partido, tenía un deber reforzado de mantener la unidad y cumplir con la normativa intrapartidaria, por lo que su actuar fue de carácter doloso.

k) Posibilidad de prever y evitar la conducta y el daño

La denunciada al asistir por propia decisión, estuvo en posibilidad de abstenerse de acudir al evento convocado por otro partido político el día 27 de mayo de 2022, evitando así poner en peligro los valores sustanciales protegidos por la normatividad interna de Morena, es decir, no existió otra circunstancia ajena a su voluntad que la constriñera a acudir al referido evento, de ahí que estuvo en aptitud de evitar la conducta motivo de infracción y de esta manera impedir el daño a los principios, valores y normativa interna de Morena que ya han sido precisados en el apartado a) y b), del presente análisis.

l) Deber de cuidado derivado de sus propias funciones o actividades.

La denunciada tiene un deber de cuidado al ostentar un cargo de elección popular emanado de Morena, pues quienes ostentan dichos cargos deben de satisfacer un estándar más estricto de valores éticos y políticos que el resto de la militancia, y con ello demostrar un apego irrestricto con la normativa intrapartidaria, así como con la estrategia política de este partido al ser una figura pública y un ejemplo para la militancia.

• CALIFICACIÓN DE LA FALTA cometida por la C. MARISOL CARRILLO QUIROGA.

Ahora bien, en relación a la calificación de la falta, la misma se realiza considerando el bien jurídico tutelado, y lo relacionado al sujeto que la cometió, en el caso en concreto resultan ser los siguientes:

- **Falta cometida:** Acudir a un evento partidista convocado por un partido político diverso a Morena durante el proceso electoral 2021-2022
- **Bien jurídicamente tutelado.** Principio de Lealtad de la Militancia Partidaria.

- **Sujeto que la cometió.** La C. Marisol Carrillo Quiroga en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero y Diputada Local por el principio de Representación Proporcional en el Congreso del Estado de Durango.

Una vez puntualizado lo anterior, esta Comisión procede al análisis de la relación de los elementos anteriormente descritos por lo cual, en principio se puntualiza que los afiliados de un partido político, en el caso, Morena, en relación al bien jurídicamente tutelado asumen el deber de preservar la imagen pública de la formación política a la que pertenecen y de colaboración positiva para favorecer su adecuado funcionamiento, esto, atendiendo en todo momento la filosofía, ideología, principio y/o corriente de pensamiento que este partido político postula.

Por tanto, en el caso en concreto primeramente, atendiendo a su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero y la vulneración al principio de Lealtad de la Militancia Partidaria, la conducta se califica como una falta **GRAVE** en razón de que transgrede lo dispuesto en el Estatuto, Reglamento, así como los Principios antes señalados.

Ahora bien, atendiendo a su calidad de Diputada Local por el principio de Representación Proporcional en el Congreso del Estado de Durango esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que la falta cometida por la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA**, consistente en **acudir a un evento partidista convocado por un partido político diverso a Morena durante el proceso electoral 2021-2022**, se califica como **GRAVE ESPECIAL**.

Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por el Estatuto y la Declaración de Principios que rigen el actuar y las obligaciones y responsabilidades de los miembros de nuestro movimiento, además de que, para su calificación, se tomaron en cuenta las condiciones especiales en las que fue desarrollada la falta, tal como el hecho de que la misma fue realizada durante el desarrollo de un proceso electoral local; así como el hecho de que la denunciada tiene la calidad de Diputada, aspectos fundamentales para acreditar que la violación que se dio a los Documentos Básicos de nuestro Movimiento, que rigen el actuar, responsabilidades y obligaciones de toda persona militante de Morena, resulta tener una **gravedad especial**.

En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas de la Denunciada, lo cual se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.

Aunado a lo anterior, es de especial importancia señalar que todos los militantes de Morena tienen el deber de apegarse a los valores éticos y políticos establecidos en nuestros documentos básicos, **máxime, las personas que ostenten un cargo de elección popular y hayan emanado de Morena, deben de satisfacer un estándar más estricto de valores éticos y políticos que el resto de la militancia, pues deben demostrar un apego irrestricto con la normativa intrapartidaria, así como con la estrategia política de este partido.**

Dicha circunstancia, resulta de suma importancia en el caso específico, pues la denunciada representa a nuestro partido político en el Congreso Local de Durango⁶, por lo que su conducta debe ser un ejemplo para la militancia de Morena.

En ese orden de ideas, se reitera que la **C. Marisol Carrillo Quiroga**, es responsable por **asistir voluntariamente a un evento político convocado por un partido político distinto a Morena, durante el proceso electoral 2021-2022**, siendo militante de Morena y Diputada emanada de Morena, puesto que dicha conducta implica la transgresión de la normativa interna de nuestro partido.

Ahora bien, no puede pasar desapercibida la conducta infractora de la denunciada, pues es de suma importancia tomar en cuenta que tuvo repercusiones y trascendió, prueba de ello son las propias denuncias de inconformidad que motivaron la integración del presente expediente; por tanto, el no imponer una sanción ejemplar que inhiba este tipo de conductas, conllevaría a que fueran replicadas por otras personas militantes y desde luego, por personas con cargos de elección popular emanadas de nuestro partido político, en detrimento y perjuicio de este.

En ese aspecto, este Tribunal Electoral Local al resolver el juicio de la ciudadanía TEED-JDC-007/2023, revocó en su totalidad la resolución emitida por esta Comisión en el expediente CNHJ-DGO-118/2022 y su acumulado CNHJ-DGO-145/2022 emitida el 12 de junio del año en curso, de conformidad con lo siguiente:

“VI. EFECTOS DE LA SENTENCIA

- a) Se revoca la resolución dictada el doce de junio por la CNHJ en el expediente CNHJ-DGO-118/2022 y su acumulado CNHJ-DGO-145/2022, para el efecto de que la CNHJ, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se le notifique la presente sentencia, califique, **debidamente fundada y motivada**, la falta cometida por la ciudadana Marisol Carrillo Quiroga, y posteriormente a ello, realice la individualización correspondiente, a efecto de que determine la sanción

⁶Consultable en: <https://congresodurango.gob.mx/diputado-p4/>

que resulte idónea -conforme al catálogo de sanciones establecido en la normativa interna de Morena- para inhibir ese tipo de conductas, lo anterior, a la luz de la interpretación conforme de las normas legales aplicables.

- b) Asimismo, ante la disponibilidad de diferentes sanciones a imponer, la CNHJ se encuentra obligada **a analizar detalladamente las circunstancias objetivas y subjetivas** en que la actora cometió la falta, para posteriormente determinar de manera fundada y motivada, qué tipo de sanción es la que resulta proporcional, atendiendo a la gravedad de la infracción, el grado de culpabilidad, reincidencia y todas aquellas circunstancias necesarias para individualizar la sanción.”

En ese contexto, cabe precisar que, lo resuelto por este Tribunal, para fundar y motivar la conducta cometida por la C. Marisol Carrillo Quiroga, consistente en la **asistencia a un evento político convocado por una fuerza política contraria a MORENA** durante una campaña electoral, determinó a esta Comisión llevar a cabo un análisis integral conforme a los parámetros indicados en el punto VI de esa sentencia tal y como se realiza a continuación.

Al respecto, es menester señalar y hacer énfasis en los elementos objetivos y subjetivos de la falta, mismos que dan pauta a calificar la falta como **GRAVE ESPECIAL**, de conformidad con lo anteriormente expuesto:

A) Elementos Objetivos

- Tipo de infracción, jerarquía de la norma infringida, precisión del precepto, denominación y descripción de tipo y conducta analizada.

La C. Marisol Carrillo Quiroga, es responsable de **asistir a un evento político convocado por un partido político distinto a Morena, durante el proceso electoral 2021-2022**, siendo militante de Morena y Diputada emanada de Morena, lo que implica una transgresión a nuestra normativa interna.

Es decir, la actora apoyó de manera notoria a un partido diverso a Morena, al asistir a un evento político, mismo que fue organizado por una coalición conformada por partidos políticos dentro de los cuales no se encontraba Morena, esto sucedido durante el desarrollo de un proceso electoral, siendo que la denunciada, al momento de realizar tales acciones, no sólo se encontraba en su calidad de militante de Morena, sino que, también se encuentra desempeñando un cargo público como Diputada emanada también de Morena.

- Bien jurídico tutelado, grado de afectación y daño causado, magnitud del riesgo o peligro al que fue expuesto.

Como ya se ha establecido en la presente resolución, se tiene por actualizada una falta sustantiva que pone en peligro los valores sustanciales protegidos por la normatividad interna de Morena, así como a los objetivos, consistentes en lograr una **Transformación y un Cambio de Régimen**, a través de una forma de hacer política que nos distinga de otras opciones políticas, objetivos que se encuentran tutelados en la Declaración de Principios, así como en los artículos 2 inciso a) y 6 incisos f) e i) y 9) de la norma estatutaria.

Lo anterior, al realizar actos que representaron un daño directo y efectivo al bien jurídicamente tutelado relativo al **Principio de Lealtad de la Militancia Partidaria**, al realizar acciones políticas contrarias a los señalados objetivos, filosofía, ideología, principios y corriente de pensamiento postulado por este partido político.

- Singularidad o pluralidad de la falta.

La falta consiste únicamente en la asistencia a un evento convocado por un partido político diverso a Morena, transgrediendo la normativa interna del partido.

- Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Se suscitaron el día 27 de mayo de 2022, en el Estado de Durango durante el desarrollo del proceso electoral 2021-2022.

Dichos aspectos quedaron acreditados de conformidad con la resolución primigenia, esto es, la ciudadana Marisol Carrillo Quiroga acudió a un evento partidista convocado por un partido político diverso a Morena durante el proceso electoral 2021-2022 en el Estado de Durango, conducta que además trascendió a los medios de comunicación, como lo es la fotografía mediante la cual se ve a lado de una persona del sexo masculino al que se describe como “Esteban Villegas” entonces candidato postulado por la Coalición Va Por México, fotografía tomada durante dicho evento político convocado por la Coalición Va Por México, que a manera de ilustrarla se señala a continuación.



Lo anterior quedó acreditado mediante la concatenación de los demás medios de prueba presentados por la parte actora consistentes en notas periodísticas:

- La acusación pública realizada por la denunciada en redes sociales del periódico Victoria de Durango, visible en el enlace:

<https://periodicovictoria.mx/local/por-ilegalidades-y-no-respetar-encuestas-diputada-no-apoya-a-candidatos-de-morena/?fbclid=IwAR2V7uFS548yywLp9pRlpIDa6v3a6GWaSvxjCXdAx6R4s2brhWVanWuTD2E>

- La acusación pública realizada por la denunciada en redes sociales del periódico el Diario de Chihuahua, dónde se observa la denunciada MARISOL CARRILLO QUIROGA acompañada de diverso candidato del Partido Revolucionario Institucional y realiza denostaciones y calumnias, visible en el enlace:

<https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/apoya-morenista-a-candidatoopositor-en-durango-20220527-1935109.html>

Siendo así, se precisa que la denunciada en su calidad de militante y diputada emanada de Morena (modo) el día 27 de mayo, durante el transcurso del proceso electoral 2021-2022 (tiempo) acudió a un evento proselitista en el Estado de Durango, convocado por un partido político diverso a Morena en (lugar).

- Reiteración de infracciones.

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de esta CNHJ, se desprende que la parte denunciada no ha sido sancionada anteriormente. No obstante, que no existe reincidencia en el actuar de la denunciada, ello no resulta suficiente para aminorar la gravedad de la falta cometida. Ello pues ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, al resolver el expediente SUP-RAP-373/2022, que en términos del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el hecho de que la reincidencia deba ser un elemento valorado para calificar la sanción e individualizarla, no implica que se trate de una atenuante para la calificación de la falta o infracción, de manera que la norma establece que, en caso de existir reincidencia, la sanción podrá ser por un monto mayor⁷, pero ello no quiere decir que, ante su ausencia, la autoridad deba considerarla una atenuante, de manera que la reincidencia no es un elemento atenuante, sino uno agravante.

Asimismo, es de particular importancia señalar, que la falta acreditada es de tal gravedad que no admite grado de tolerancia alguno y en ese sentido el hecho de que la persona no sea “reincidente”, de ningún modo implica una atenuante al momento de imponer la sanción, pues como ya se precisó en el apartado **“a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra”** de la individualización de la sanción, la falta acreditada constituye un detrimento en el valor de nuestro partido y nuestra militancia ante la ciudadanía en general, lo que ocasiona un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados por las normas internas de Morena, **por lo que la supresión de dicha conducta debe ser tal que no admita reincidencias.**

- Condiciones externas y medios de ejecución utilizados.

La conducta se suscitó en un periodo de proceso electoral donde Morena fue partícipe, en el que la denunciada decidió por voluntad propia asistir a un evento convocado por partido diverso, a sabiendas que bajo el cargo que ostenta, rompe con la imagen de unidad de nuestro partido.

⁷ Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 41/2010, de la Sala Superior de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN

B) Elementos Subjetivos

- Forma y grado de intervención del infractor

La denunciada acudió de forma personal al evento convocado por otro partido político el día 27 de mayo de 2022.

- Comisión dolosa o culposa de la falta

La denunciada acudió por propia decisión para movilizarse en favor de causas ajenas a este partido político, a sabiendas de que, en su calidad de militante y diputada emanada de nuestro partido, tenía un deber reforzado de mantener la unidad y cumplir con la normativa intrapartidaria, por lo que se estima que su actuar fue de carácter **Doloso**.

- Posibilidad de prever y evitar la conducta y el daño

La denunciada al asistir por propia decisión, en primer lugar, como militante conoce nuestros documentos básicos y sabiendas de ello, máxime que bajo el cargo que ostenta, rompe con la imagen de unidad de nuestro partido, asistió, estuvo en posibilidad de abstenerse de acudir al evento convocado por otro partido político el día 27 de mayo de 2022, por lo que de igual forma estuvo en aptitud de evitar poner en peligro los valores sustanciales protegidos por la normatividad interna de Morena.

- Deber de cuidado derivado de sus propias funciones o actividades.

La denunciada tiene un deber de cuidado al ostentar un cargo de elección popular emanado de Morena, pues quienes ostentan dichos cargos deben de satisfacer un estándar más estricto de valores éticos y políticos que el resto de la militancia, y con ello demostrar un apego irrestricto con la normativa intrapartidaria, así como con la estrategia política de este partido al ser una figura pública y un ejemplo para la militancia.

Aunado a ello, la Declaración de Principios de Morena dicta, en su párrafo quinto, que la autoridad legítima no es una condición que alguien pueda asignarse a sí mismo, sino una investidura otorgada por la colectividad, por lo que el desempeño de los cargos públicos debe ser visto como una oportunidad para servir y procurar el bien de las y los demás, no

como un medio para la consecución de objetivos personales, de facción o de grupo. De manera que una vez que se accede al poder, éste debe ser ejercido con honestidad, austeridad republicana y apego a la ley, y exclusivamente para beneficio de los mandantes y del país, sin obtener algún privilegio, prebenda o ganancia particular, y con plena disposición para devolverlo a su propietario, que es el pueblo, si éste así lo decide: el pueblo pone y el pueblo quita. En ese contexto, la denunciada debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para evitar la comisión de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la falta cometida por la **C. Marisol Carrillo Quiroga**, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Ahora bien, el régimen de sanciones debe responder a las exigencias de los principios de prohibición de multas excesivas y de proporcionalidad, contenidos en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución federal, que establecen un mandato al legislador, así como una garantía para los ciudadanos, de que la imposición de una pena o sanción deberá ser proporcional al ilícito cometido.

De ello se advierte que se prevé un sistema de sanciones que no, únicamente, da cuenta de un amplio espectro sobre posibles penalidades, sino que también informa, de manera enunciativa, aquellos elementos que la autoridad deberá considerar para verificar las particularidades del caso a sancionar, lo que permite actuar de conformidad con el mandato constitucional de proporcionalidad en la imposición de sanciones. Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por una autoridad electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En el caso, el punto segundo solo aplicaría si esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tomara la determinación de imponer una multa pecuniaria, circunstancia que no

tiene una aplicación válida en el presente caso, tal como se explicará en los siguientes apartados.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la determinación de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos analizados en esta resolución y que se encuentran contenidas en el catálogo previsto en el Título Décimo Quinto titulado “De Las Sanciones” del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Por principio, el artículo 124 del citado Reglamento establece que se consideran faltas sancionables competencia de esta CNHJ, las establecidas en el Artículo 53º del Estatuto de Morena.

Ahora bien, del citado artículo 53, se destacan los siguientes supuestos punitivos en concordancia con el estudio desarrollado en la presente resolución;

“Artículo 53. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo partidista o público;

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA y sus reglamentos;

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los órganos de MORENA;

d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades partidarias;

e. Dañar el patrimonio de morena;

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de MORENA;

g. Ingresar a otro partido o aceptar la postulación de una candidatura por otro partido;

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA durante los procesos electorales internos; y

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.

*j. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida interna de **morena**.”*

(énfasis en lo propio)

Es importante destacar que la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, por lo que, para el caso, debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Dentro de este marco, sucede que, al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es la finalidad que debe perseguir una sanción.

Por lo que no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta CNHJ, a la Normatividad Interna, así como a los principios, postulados, responsabilidades y obligaciones que mandatan el actuar de nuestros militantes y que deben guiar su actividad cotidiana y partidista.

Siendo así, debido a la gravedad que implicó el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como militante de Morena, se desarrollarán las sanciones previstas en el catálogo de sanciones dentro de la normativa intrapartidista, motivando y fundamentado por qué aplican o no aplican al caso concreto, imponiendo aquella que sea aplicable y adecuada para evitar o inhibir este tipo de conductas ilegales.

En este contexto, se estima necesario por parte de esta CNHJ, establecer los parámetros Convencionales, Constitucionales y Legales del derecho de asociación, el derecho a la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos en general y, en particular, las consecuencias respecto de la militancia de Morena por el incumplimiento de las normas que rigen Nuestra Vida Interna.

Derecho de Asociación.

En lo concerniente al derecho fundamental de **asociación de forma general**, se encuentra reconocido en el artículo 9 de la Constitución General de la República; asimismo, el artículo

35, fracción III, del mismo ordenamiento consagra que la ciudadanía mexicana tendrá el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.

En cuanto al ámbito del derecho internacional, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que **la libertad de asociación** prevista en la Constitución General de la República, así como en los tratados Internacionales, es un derecho complejo compuesto por libertades de índole positiva y negativa que implica, entre varias cuestiones, **la posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objetivo y finalidad lícita sea de libre elección.**

Así, este derecho implica la **formación de una nueva persona jurídica** con efectos jurídicos continuos y permanentes⁸.

Ahora bien, en la Constitución Federal también se **establecen formas específicas para ejercer el derecho de asociación**, en este sentido, en el artículo 41, Base I párrafo primero y segundo, se reconoce como una forma de asociación a los **partidos políticos**.

Así, a estos se les define como **entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática**, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, **de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan** y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

En ese sentido, **el derecho de asociación** consiste en el derecho fundamental de la ciudadanía para conformar **una entidad con personalidad jurídica propia y distinta a la de sus integrantes**.

⁸ Registro: 164995, tesis 1ª. LIV/2010, de rubro **LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS**; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, marzo de 2010.

Así, una forma de asociación específica es la conformación de partidos políticos, como un medio fundamental para el desarrollo de la democracia representativa, a través del cual la ciudadanía participa en su gobierno.

La autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 Base I, párrafo tercero y 116 fracción IV inciso f) de la Constitución General de la República, se establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la propia Constitución y la Ley.

Es así que a partir de estas disposiciones surgen los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos.

En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en torno al tema, estableciendo que los partidos políticos cuentan con una protección institucional que salvaguarda su vida interna.⁹

Dentro de ese orden de ideas, los mencionados principios garantizan que los partidos políticos cuenten con un margen considerablemente abierto de actuación en todo lo concerniente a su régimen interior; esto es, que cuentan con la posibilidad de tomar y ejecutar resoluciones en todos y cada uno de los rubros internos que les atañen.

Asimismo, el máximo Tribunal de nuestro País ha reconocido que los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos dimanen de la voluntad de la ciudadanía que, en ejercicio de una decisión política, definen las bases, ideología, líneas doctrinales y de acción de los institutos políticos, acordes al marco constitucional y legal.

En razón de ello, dichos aspectos no pueden ser alterados o anulados; sino que, por el contrario, deben ser respetados por los órganos del Estado.

En este sentido, y acorde con la Norma Suprema, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 34, establece que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base

⁹ Acción de inconstitucionalidad 85/2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de once de febrero de dos mil diez.

en las disposiciones previstas en la Constitución, en la Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Esta disposición reconoce como asuntos internos de los partidos políticos:

- La elaboración y modificación de sus documentos básicos.
- Determinación de los requisitos y mecanismos para la afiliación libre y voluntaria.
- Elección de los integrantes de sus órganos internos.
- Procedimientos de elección para sus precandidaturas y candidaturas.
- Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes.

Por su parte, el artículo 35 de la Ley General de Partidos Políticos, reconoce que los documentos básicos de los partidos políticos serán:

- La declaración de principios.
- El programa de acción.
- Los estatutos.

El artículo 39 inciso k) de Ley General de Partidos Políticos, dispone que, **los partidos políticos establecerán en el Estatuto las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión.**

Por su parte, el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos señala que los estatutos de los partidos políticos establecerán las **obligaciones de sus militantes** y deberán contener determinadas reglas, entre las que se mencionan las siguientes:

- **Respetar y cumplir los estatutos y normatividad partidaria.**

- **Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción.**
- Velar por la democracia interna y **el cumplimiento de las normas partidarias.**
- Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias.

De esta forma, se observa que la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos emana de la Constitución General de la República y que, en concordancia con ello, **en la ley, de manera expresa, se establece la obligación de las y los militantes de observar las reglas internas** de los partidos políticos al que pertenecen.

En ese contexto, **la potestad de los partidos para autodeterminarse implica el establecimiento de los derechos y obligaciones de sus afiliados, afiliadas y militantes, así como para instituir el régimen sancionador interno**, en el cual se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

Acorde con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, ha considerado que dentro de los **elementos mínimos de democracia** que deben estar presentes en los partidos políticos se encuentran **el establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas**, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a **órganos sancionadores**, a quienes se asegure independencia e imparcialidad.

Ello, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 3/2005, de rubro: **“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”**¹⁰.

De esta forma, el establecimiento de los procedimientos sancionadores o disciplinarios al interior de los partidos políticos se funda en aspectos como: a) el principio de autodeterminación; b) en su obligación constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática siguiendo sus programas y principios; y c) la obligación de

¹⁰ Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 120 a 122.

los militantes de respetar las normas internas, lo cual se encuentra establecido en ley.

Dimensión individual y colectiva del derecho de asociación

De acuerdo con los artículos convencionales, constitucionales y legales antes citados, así como con los criterios referidos, puede concluirse que el derecho de asociación política tiene dos dimensiones.

Una se refiere a la individual, consiste en el derecho de las personas a adherirse a un ente colectivo para ejercer sus derechos de participación en la vida política.

Por otra parte, existe una dimensión colectiva, la cual consiste en la protección jurídica que adquiere el ente con personalidad jurídica propia, a fin de lograr la consecución de los fines para los cuales se creó, lo anterior, implica **el derecho a funcionar como una organización y estructura que sigue sus reglas internas, postulados y fines.**

En el caso de los partidos políticos, son los afiliados/militantes quienes establecen y aprueban sus documentos básicos, que por mandato legal serán de observancia obligatoria.

Ello no significa que las personas postuladas por un partido político se encuentren fuera del marco constitucional y legal, pues en todo momento se encontrarán sujetos a su observancia, en este sentido, no pasa desapercibido para esta CNHJ que las reglas internas y documentos básicos de los partidos políticos, previo a su registro, se encuentran sujetos a un procedimiento de declaración de procedencia constitucional y legal que se sigue ante el Instituto Nacional Electoral.

Así entonces, la autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho a dictar sus normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

La Sala Superior ha reconocido¹¹ que **la vertiente colectiva** del derecho de asociación implica quien decide la afiliación y la militancia a un partido político, acepta por voluntad propia y en uso de su derecho constitucional de asociación, **formar parte de la militancia partidista, pasar con sus concepciones individuales a las de la colectividad**, en la cual los intereses **de los miembros se conjugan colectivamente**, con todo lo que involucran,

¹¹ Sentencia dictada en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-557/2018.

ideología, corriente de pensamiento, y/o doctrina, fines, y lucha por el poder en la asociación a la que decidió pertenecer, situación que por regla general está regida por los principios básicos de los estatutos y documentos fundamentales del partido.

Así, señala que no solo se crea un vínculo jurídico, sino de solidaridad moral basada en la confianza recíproca y en **la adhesión a los fines asociativos**; de ahí que **no puede descartarse** que los estatutos puedan **establecer como causa de expulsión una conducta que la propia asociación valore como lesiva a los intereses del gremio partidista**.

Es importante destacar que en el Derecho Internacional también se ha estudiado la gran importancia que en un sistema democrático tiene la dimensión colectiva del derecho de asociación a través de los partidos políticos.

Así, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia)¹² -de la cual México es miembro de pleno derecho desde 2010- en conjunto con el Panel de Expertos en Partido Políticos de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación, emitieron los "*Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos*"¹³.

En dichos lineamientos se destaca que **los partidos políticos son una plataforma colectiva para la expresión de los derechos fundamentales de asociación y expresión de los individuos** y han sido reconocidos por la Corte Europea de Derechos Humanos como actores integrales en el proceso democrático.

¹² La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, mejor conocida como Comisión de Venecia, es el órgano consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar asesoría legal sobre cuestiones constitucionales que promuevan el pleno respeto a los derechos fundamentales entre sus Estados miembros. Está integrada por expertos independientes nombrados por sus gobiernos por un periodo de cuatro años, que se reúnen en sesión plenaria para aprobar dictámenes, formular recomendaciones, intercambiar información y compartir buenas prácticas.

En este foro multilateral participaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asistiendo a las sesiones plenarias, brindando su opinión a las consultas formuladas por otros miembros y a través de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, de la cual la Comisión de Venecia funge como Secretaría.

Información consultable en la dirección electrónica: <https://www.scjn.gob.mx/relaciones-institucionales/comision-de-venecia>.

¹³ Consultable en: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2010\)024-spa](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)024-spa).

Además, son los medios mayormente utilizados para la participación política y ejercicio de los derechos relacionados con ésta.

En el caso, los partidos son generadores para una sociedad política pluralista y juegan un papel activo en garantizar un electorado informado y participativo.

Adicionalmente, la Comisión de Venecia señala que **los partidos sirven, a menudo, como un puente entre las ramas ejecutiva y la legislativa del gobierno y pueden servir para priorizar efectivamente la agenda legislativa dentro de un sistema de gobierno.**

En otro instrumento emitido por la Comisión de Venecia, denominado *Código de Buenas Prácticas en el Ámbito de los Partidos Políticos*, se destacan las dimensiones individual y colectiva del derecho de afiliación política.

Por una parte, toda persona debe ser libre de escoger ser miembro de un partido político o no y de elegir a qué partido pertenecer -dimensión individual-.

Asimismo, **los partidos pueden negar la afiliación de cualquier solicitante que rechace los valores que defienden o cuya conducta va en contra de los valores e ideales del partido.**

La mejor práctica requiere la existencia de órganos disciplinarios y procedimientos claros para tomar decisiones razonadas, por tanto, los partidos deben cerciorarse de que sus miembros cumplan con el orden jurídico¹⁴.

De lo anterior se desprende que la dimensión colectiva del derecho humano de asociación política, específicamente los partidos políticos, implica que las y los asociados actúen en congruencia con los principios, normas internas y una determinada corriente de pensamiento a la cual se adhirieron voluntariamente al decidir formar parte de un partido político determinado.

Este derecho colectivo de asociación se ejerce a partir de que sus integrantes **puedan decidir sobre la permanencia de aquellas personas que no actúan en respeto a las**

¹⁴ Adoptado por la Comisión de Venecia en su 77ª Sesión Plenaria (Venecia, 12-13 de diciembre de 2008) e informe aclaratorio adoptado por la Comisión de Venecia en su 78ª Sesión Plenaria (Venecia, 13 y 14 de marzo de 2009).

normas y corriente doctrinal a la que se adhirieron; de tal forma que, coartar este derecho vulneraría su autodeterminación y tiene impacto sobre el cumplimiento de los fines para los cuales se creó.

Ahora bien, la importancia del derecho a pertenecer e integrar un partido político no implica que no esté sujeto a restricciones o limitaciones, por el contrario, se reconoce también que, como otros derechos humanos, **la libertad de asociación no es un derecho absoluto y admite para su ejercicio ciertas restricciones.**

De acuerdo al informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad pacífica y de asociación, mismo que se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se debe tener presente el hecho de que, si bien los partidos políticos son un “subgrupo” de asociaciones a las que debe aplicarse el derecho a la libertad de asociación, en tanto organizaciones establecidas para cumplir objetivos específicos, pueden estar sujetas a un régimen particular

De manera que la interpretación de la normativa que establece la restricción a ese derecho de asociación, cuando se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales, debe de estudiarse desde una perspectiva integral que considere su impacto en los diferentes principios y derechos interrelacionados; así como en los principios que define el sistema de partidos en nuestro país.

Respecto a ello, resulta fundamental tomar en cuenta lo establecido en los Lineamientos de la Comisión de Venecia, en los que se destacan el derecho de los individuos a asociarse y la importancia del trato igualitario, así como la necesidad de interpretar estrictamente cualquier limitación o regulación de los partidos:

“14. El derecho de los individuos a asociarse y formar partidos políticos debe, tanto como sea posible, encontrarse libre de toda interferencia. **Aunque existen limitaciones al derecho de asociación, dichas limitaciones deben interpretarse estrictamente y solo razones convincentes y de suficiente fuerza pueden justificar las limitaciones a la libertad de asociación.** Los límites deben ser estipulados en la ley, resultar necesarios en una sociedad democrática y como una medida proporcional. La afiliación a los partidos políticos debe ser voluntaria por naturaleza y ningún individuo debe ser forzado a unirse o pertenecer a ninguna asociación contra su voluntad. La amplia protección reconocida al derecho de los individuos a asociarse, exige que los partidos políticos también estén libres de cualquier intervención innecesaria.

[...]

19. Todos los individuos y grupos que busquen constituir un partido político deben poder hacerlo sobre la base de un trato igualitario ante la ley. Ningún individuo o grupo que desee integrar un partido político debe ser favorecido o desfavorecido en este esfuerzo

por parte del estado, y la regulación de los partidos debe ser aplicada uniformemente. Para eliminar las desigualdades históricas se pueden adoptar medidas que garanticen igualdad de oportunidades para las mujeres y las minorías. [...]"

De esta forma, también se reconoce por la Comisión de Venecia que los requisitos para integrar un partido político no representan, en sí mismos, una violación al derecho de libre asociación.

Los criterios expuestos, si bien no resultan vinculantes o se trata de directivas o recomendaciones generales que dependen del sistema electoral y del sistema de partidos de cada Estado, deben ser tomados en cuenta a la hora de interpretar los requisitos para mantener la militancia o asociación de una persona a un partido político, de forma estricta y desde una perspectiva de derechos humanos, a fin de no generar una situación que afecte injustificadamente el pluralismo político como expresión de la diversidad del pensamiento y la acción política en una sociedad, así como el derecho fundamental de asociación política; lo que no implica que toda restricción para efecto de establecer las reglas claras respecto a los requisitos que se deben cumplir para pertenecer a determinado partido político, sea contraria a los derechos de asociación y participación política. **De manera que resulta claro que el derecho de asociación no es un derecho absoluto, ya que se encuentra delimitado por las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que regulan el procedimiento por el cual una persona puede o no seguir perteneciendo a un partido político.**

La interpretación conforme del modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad

Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las autoridades del Estado mexicano asumieron el compromiso de incorporar en su quehacer jurisdiccional los tratados internacionales en materia de derechos humanos como derecho nacional de origen internacional.

Una de las herramientas más valiosas para hacer realidad el objeto de la reforma constitucional la brinda el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, establecido en el artículo 1º constitucional, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México y en el expediente Varios 912/201011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del cumplimiento del caso Rosendo Radilla Pacheco.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al control de convencionalidad

ha señalado que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un 'control de convencionalidad' entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las obligaciones que surgen de la Convención Americana (“respetar y hacer respetar –garantizar– las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos ahí consagrados en toda circunstancia y respecto de todas las personas bajo su jurisdicción”); tienen carácter erga omnes.

Además, considera que “De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto del derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.”

Ahora bien, de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, los juzgadores deben realizar las siguientes interpretaciones:

1) Interpretación conforme en sentido amplio:

Significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

2) Interpretación conforme en sentido estricto:

Significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

3) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles:

Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

Todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes al hacer la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas.

Las normas siguientes, son susceptibles de una interpretación sistemática, y acordes con el propósito de fundar la presente Resolución:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 35, fracción III, 41 fracción I; 59; 115 fracción I párrafo segundo; 116 fracción II párrafo segundo.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: artículo 227 párrafo quinto.
- Ley General de los Partidos Políticos: artículos 4 numeral 1 inciso a); 18; 23 inciso c); 41 incisos a) y b); 87 párrafo 6.
- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango: artículos 48; y 176 fracción V.
- Declaración de principios de Morena.
- Estatuto de Morena: artículos 2 inciso a); 3 inciso i); 4; 4 Bis; y 6 inciso h) y d); 9; 47 y 53.
- Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: artículos 124, 126, 217, 129, 130, 131, 133 y 138

- Reglamento de Afiliación de Morena; artículo 3

Régimen Sancionador de Morena.

De conformidad con lo desarrollado en la presente resolución, este procedimiento sancionador ordinario se inició con motivo de la queja de la Parte actora en la que acusó a la Denunciada de apoyar a otro partido político acudiendo a un evento partidista durante un proceso electoral (2021-2022), siendo actos transgresores de la ideología de nuestro Partido, así como de los Estatutos, la Declaración de Principios y el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Por tanto, resulta de trascendental importancia hacer un análisis de Nuestro Marco Normativo Interno, a fin de determinar los alcances de estas normas, dadas al amparo del principio de autodeterminación, a través de las cuales las y los militantes de Morena establecimos las normas vigentes de justicia partidaria y de **permanencia en nuestro Movimiento**.

Así entonces, debe señalarse que Nuestro Estatuto establece las bases del régimen sancionador disciplinario que deberá implementarse para conocer sobre las posibles faltas a la normatividad partidista y las correspondientes sanciones.

En este contexto, el artículo 47 del Estatuto dispone que es responsabilidad de Nuestro Partido admitir y conservar en la organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.

A fin de lograr este propósito, Nuestro Partido ha desarrollado y establecido un sistema de justicia partidaria pronta y expedita en una sola instancia, a partir de cual se garantizará el acceso a la justicia, cumpliendo con las formalidades esenciales previstas en la Constitución General de la República, así como en las demás Leyes a las cuales se encuentra sujeto nuestro actuar.

Luego entonces, para garantizar el cumplimiento de este régimen partidista, el artículo 49 de los Estatutos establece que le corresponden las siguientes atribuciones a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia:

- Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de Morena.
- **Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de Morena.**
- Conocer de las quejas, denuncias o procedimientos de oficio que se instauren en contra de las y los dirigentes nacionales de Morena.
- Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de Morena, con excepción de las que el Estatuto confiera a otra instancia.

Asimismo, en el artículo 53 del Estatuto de nuestro partido, se contemplan una serie de supuestos que se consideran faltas sancionables por esta CNHJ.

Es en este contexto que, como se ha explicado y desarrollado en el cuerpo de esta resolución, se trata de una conducta **grave especial**, pues se violentan principios y valores que Nuestro Partido protege a fin de evitar que, entre Nuestra Militancia se implementen campañas negativas, o se apoye de manera notoria a candidatas postulados por la Coalición de Derecha, pues se trata de una acción propia de una forma tradicional de realizar política y que representa un daño directo y efectivo al bien jurídicamente tutelado relativo al **Principio de Lealtad de la Militancia Partidaria**, al realizar acciones políticas contrarias a los señalados objetivos, filosofía, ideología, principios y corriente de pensamiento postulado por este partido político pues al haber acudido a un evento proselitista convocado por otra fuerza política, esto implicó de manera abierta que no apoyara a nuestra entonces candidata a la gubernatura de Durango, beneficiando de esta manera a la candidatura de otro partido político, lo que obstaculiza de manera directa al bien jurídico tutelado por la norma consistente en lograr una **Transformación y un Cambio de Régimen.**

Ello en razón a que se deja de apoyar a las candidaturas aprobadas por los órganos de nuestro partido político con el fin de respaldar “simbólicamente” las propuestas electorales de partidos políticos diversos a Morena.

Así, una vez desarrollados los parámetros Convencionales, Constitucionales y Legales que preceden, a continuación, se detallan las características de la falta analizada, para, posteriormente, determinar la sanción correspondiente de acuerdo a lo antes referido y con base en las Normas Internas Vigentes previamente adoptadas por las y los militantes de

Nuestro Partido.

Así entonces, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Denunciada se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por Nuestros Documentos Básicos.
- Que la Persona Denunciada, como militante de Morena, conoce los principios, responsabilidades y obligaciones contenidas en nuestra normativa interna invocada.
- La Denunciada no es reincidente.

En este sentido, sirve de apoyo el criterio que la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012, respecto de que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el que participe en una conducta ilegal, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

De tal forma que la selección y cuantificación de la sanción concreta por parte de la autoridad intrapartidaria debe realizarse de forma tal, que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si éstas produjeran una afectación insignificante o menor en la infractora, en comparación con la gravedad de la falta, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello conservó algún beneficio.

Esto es, la intervención debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley (en el caso a la Norma Partidista), ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en los artículos 126 y 127 del Reglamento de la CNHJ no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención de la

Denunciada, es decir, una amonestación privada o pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés de la militancia.

Ahora bien, tampoco se consideran adecuadas las sanciones previstas en los artículos 130, 131, 132 y 133 del Reglamento puesto que la Denunciada no se encuentra en alguno de los supuestos de hecho que ahí se prevén, esto es, no ocupa un cargo de dirección o representación dentro del partido, ni tampoco nos encontramos inmersos en un proceso electoral en el cual la Denunciada se encuentra participando como precandidata, candidata o candidata externa.

Por lo que respecta al artículo 128 del Reglamento, mismo que prevé la suspensión de derechos, se estima que, dada la **GRAVEDAD ESPECIAL** de la falta acreditada en la presente resolución, no es suficiente para suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones Estatutarias, así como las contenidas en la Declaración de Principios, ello en atención al bien jurídico tutelado, lo anterior es razón de la trascendencia de las normas violadas, en términos de los ampliamente explicado en los apartados que anteceden.

Lo anterior, debido a la gravedad que implicó el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como militantes de Morena, de ahí que se estime que la sanción prevista en este artículo sea insuficiente para evitar o inhibir este tipo de conductas ilegales.

Ahora bien, en el artículo 129 del Reglamento **se establece que la cancelación de la afiliación a Morena consiste en la pérdida definitiva de los derechos y obligaciones** derivadas del Estatuto y de la Ley General de Partidos Políticos.

Al respecto, se prevé que serán acreedoras a la **cancelación de la militancia**, las personas que cometan las conductas siguientes:

- Realicen actos que impliquen campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los candidatos postulados por Morena.
- Ocupen cargos de elección popular y no apliquen en el marco de la Ley las líneas generales de gobierno, documentos básicos y el Proyecto Alternativo de Nación aprobadas por Morena.

- Dañen gravemente el patrimonio de Morena.
- Realicen actos de corrupción, violación a los Derechos Humanos y sociales o actividades delictivas.
- Se afilien a otro partido y/o acepten la postulación como candidatas o candidatos de otras organizaciones políticas.
- Sean registradas o registrados como representantes de otro partido, sin autorización del órgano correspondiente.
- **Apoyen de manera notoria a candidatas y/o candidatos, dirigentes y/o postulados de otro partido por cualquier medio.**
- Realicen actos que impliquen la subordinación a otros partidos políticos y/o a personajes antagónicos a los principios establecidos en los Documentos Básicos de Morena.
- Realicen actos que impliquen alianzas con otros partidos políticos y/o con personajes antagónicos a los principios establecidos en los Documentos Básicos de Morena.
- Realicen acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas y/o de conveniencia con la finalidad de beneficiar a grupos de interés o de poder y/o en detrimento de Morena y/o de sus Documentos Básicos.
- Alteren documentación oficial de Morena.
- Falsifiquen documentación oficial de Morena.
- Hagan uso indebido de la documentación oficial de Morena.
- Ejercen violencia política y violencia política de género en cualquiera de sus variantes.
- Realicen campañas de afiliación distintas a las de Morena.
- Divulguen o sustraigan información confidencial de Morena, en los términos de las leyes, sin autorización de los órganos competentes.

Ahora bien, no puede pasar desapercibido que los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, implican el derecho que tienen de autogobernarse y les permite emitir las reglas internas necesarias para resolver las controversias que se susciten en su interior, por lo que gozan de la facultad autonormativa de establecer su propio régimen regulador en su interior.

De ahí que, en los asuntos internos de los partidos políticos, como lo son las faltas y sanciones en las que puede incurrir un militante, se debe privilegiar el principio de autoorganización y autodeterminación.

En ese orden de ideas, si nuestro partido político al emitir el Reglamento de esta comisión, contempló en su artículo 129, que los militantes de Morena podrían ser sancionados con la cancelación de su registro en el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, debe entenderse que lo anterior, obedece a los principios de autoorganización y autodeterminación, pues el Morena en pleno uso de su autonomía¹⁵ estableció dicha sanción para aquellas violaciones que atenten contra los valores, principios y la vida interna del partido.

La cancelación de la afiliación como forma de protección del partido.

De conformidad con el artículo 41 Constitucional, los partidos políticos gozan de autoorganización y autodeterminación, lo que implica que tienen el derecho de gobernarse internamente y en ese sentido tiene la facultad de emitir reglas que rijan la vida interna de su partido.

En ese orden de ideas, los partidos políticos en ejercicio de dichos derechos, pueden emitir las reglas internas necesarias para resolver las controversias que se susciten en su interior, es decir, pueden establecer una serie de comportamientos considerados lesivos para los intereses de su organización.

El derecho de autoorganización de los partidos, es un principio constitucional, que implica la facultad autonormativa de establecer su propio régimen regulador al interior de su estructura.

De ahí que, los partidos políticos puedan establecer la cancelación de la afiliación como un

¹⁵Criterio sostenido por la Sala Superior en el SUP-JDC-1452/2022

recurso excepcional, por causas que afecten su sistema normativo interno o pongan en riesgo su vida interna.

Ahora bien, el derecho de asociación, al igual que los demás derechos fundamentales irradian todos los sectores del ordenamiento jurídico, es decir no se limitan a regir únicamente las relaciones del individuo frente al poder público, siendo así, el derecho de asociación también debe ser garantizado por los partidos políticos.

Sin embargo, los partidos políticos tienen la potestad de rechazar cualquier conducta cometida tanto su interior o hacia el exterior, que pueda desestabilizarlos y poner en riesgo su existencia, identidad partidaria o le impida la consecución de sus fines constitucionales.

En ese sentido, puede darse el caso en que exista un conflicto entre los derechos e intereses de un partido político y el derecho de asociación de un militante, dicho conflicto no podría resolverse meramente restringiendo o menoscabando dicho derecho y en sentido inverso, dicho derecho de asociación no es invulnerable, ya que puede ser vencido por otro derecho fundamental.

Es por lo anterior, que debe existir una ponderación en cada caso entre el derecho de asociación y del derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, que incluye, establecer normas que impidan la comisión de hechos que lesionen gravemente la estabilidad del partido político, pongan en riesgo su existencia o identidad partidaria o impidan la consecución de sus fines constitucionalmente encomendados.

Por lo tanto, el derecho de asociación, al igual que los demás derechos fundamentales, por sí mismos no tienen un carácter absoluto, por lo que puede ser sometido a ciertas limitaciones como ya fue precisado en los apartados anteriores, pues si fuera de carácter absoluto, se podrían vulnerar las finalidades constitucionales reconocidas a los partidos políticos nacionales y por tanto el orden público constitucional.

Se dice lo anterior, porque también debe de protegerse el derecho de asociación de los demás ciudadanos que forman parte del partido político, así como el honor e imagen del mismo instituto político entre otros bienes jurídicos susceptibles de protegerse legítimamente por el partido, frente al derecho de asociación de un solo militante.¹⁶

Asimismo se precisa que si bien el principio de pro persona, implica la posibilidad de

¹⁶ Razonamiento similar fue realizado por la Sala Superior en el SUP-JDC-557/2918

establecer una preferencia normativa cuando haya contradicción entre dos normas cuyo contenido son derechos humanos; de tal manera que se debe preferir la norma que sea más favorable a la persona, esto solo es así cuando dicha aplicación favorable a la persona, no se convierta al mismo tiempo en un perjuicio para otra, como lo es en el caso en concreto, pues derivado de la falta acreditada, el derecho de asociación de los demás militantes, así como los bienes jurídicos de este partido político también se han visto comprometidos, por lo que la sanción que le sea impuesta a la C. Marisol Carrillo Quiroga, no puede únicamente atender a lo que sea más beneficioso a su persona, sino al partido y a los de su militancia.

Lo anterior responde a una interpretación conforme al artículo 35 y 41 Constitucional, pues no pueden ignorarse el derecho de asociación de los demás ciudadanos que forman parte del partido político, así como los bienes jurídicamente tutelados de este partido, los cuales ya han sido reiterados ampliamente.

De ahí que, de las circunstancias de hecho y de derecho desarrolladas en la presente resolución, se considere que la sanción adecuada como sanción a este tipo de acciones y conductas, es la cancelación del registro en el padrón nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena de la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA**, esto es, la pérdida definitiva de los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General de Partidos Políticos, pues es una obligación de toda persona que integre nuestro Movimiento rechazar la réplica de esas conductas, de ahí que esta Comisión desemboque en la máxima sanción. Se explica.

Por principio, el referido artículo 129 inciso del Reglamento dispone textualmente lo siguiente:

Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA.

La cancelación de la afiliación a MORENA consiste en la pérdida definitiva de los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General de Partidos Políticos. Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que:

- a) Realicen actos que impliquen campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los candidatos postulados por MORENA;*
- b) Ocupen cargos de elección popular y no apliquen en el marco de la Ley las líneas generales de gobierno, documentos básicos y el Proyecto Alternativo de Nación aprobadas por MORENA;*
- c) Dañen gravemente el patrimonio de MORENA.*

- d) Realicen actos de corrupción, violación a los Derechos Humanos y sociales o actividades delictivas.*
- e) Se afilien a otro partido y/o acepten la postulación como candidatas o candidatos de otras organizaciones políticas.*
- f) Sean registradas o registrados como representantes de otro partido, sin autorización del órgano correspondiente.*
- g) Apoyen de manera notoria a candidatas y/o candidatos, dirigentes y/o postulados de otro partido por cualquier medio.**
- h) Realicen actos que impliquen la subordinación a otros partidos políticos y/o a personajes antagónicos a los principios establecidos en los Documentos Básicos de MORENA.*
- i) Realicen actos que impliquen alianzas con otros partidos políticos y/o con personajes antagónicos a los principios establecidos en los Documentos Básicos de MORENA.*
- j) Realicen acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas y/o de conveniencia con la finalidad de beneficiar a grupos de interés o de poder y/o en detrimento de MORENA y/o de sus Documentos Básicos.*
- k) Alteren documentación oficial de MORENA.*
- l) Falsifiquen documentación oficial de MORENA.*
- m) Hagan uso indebido de la documentación oficial de MORENA.*
- n) Ejercen violencia política y violencia política de género en cualquiera de sus variantes.*
- o) Realicen campañas de afiliación distintas a las de MORENA.*
- p) Divulguen o sustraigan información confidencial de MORENA, en los términos de las leyes, sin autorización de los órganos competentes.*

En términos de lo explicado en la presente resolución, esta CNHJ, concluye que las acciones y conductas, debidamente acreditadas de la denunciada consistieron en haber acudido a un evento político convocado por la Coalición “Va Por México”, esto es, una coalición de la cual no fue partícipe Morena, durante el pasado proceso electoral 2021-2022 en el Estado de Durango, siendo militante de Morena y Diputada emanada de Morena.

En ese sentido, toda vez que después de haber realizado el análisis correspondiente a la individualización de la sanción, tomando en consideración las circunstancias objetivas y subjetivas en que la actora cometió la falta, así como el grado de culpabilidad, reincidencia y demás circunstancias de hecho y de derecho que han sido plasmadas en esta resolución, mismas que llevaron a calificar la falta cometida por la **C. Marisol Carrillo Quiroga** como **Grave Especial**, y después de haber ponderado las diferentes sanciones que contempla el Reglamento de esta CNHJ, con la necesidad de suprimir la conducta acreditada, así como prever su reiteración en el futuro, se concluye que la conducta desplegada debe ser objeto de una sanción consistente en la pérdida de los derechos como militante.

Una vez establecido lo anterior, y explicadas las razones del por qué la sanción adecuada al caso concreto es la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA**, se procede a determinar cuál de los supuestos establecidos en el artículo 129 del Reglamento se actualiza al caso

concreto; por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en el presente caso la sanción que se actualiza es el supuesto de sanción previsto en el artículo 129 inciso g) del Reglamento, pues de acuerdo al análisis desarrollado en la presente resolución en relación con la conducta infractora desplegada por la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA** implicaron un apoyo a otro partido político durante un proceso electoral.

Por consiguiente, es claro para esta CNHJ que en nuestro Estatuto se contempla **la posibilidad de perder la militancia de quienes apoyen de manera notoria a candidatas y/o candidatos, dirigentes y/o postulados de otro partido por cualquier medio**, como es el presente caso.

Bajo esta tesitura, tenemos que de la foto en la que se observa a la denunciada con el entonces candidato de la Coalición “Va Por México” se desprenden elementos subjetivos de los que se advierte un claro apoyo a la referida Coalición, de la cual Morena no formó parte.

Lo anterior, con sustento en la acreditación de la asistencia de la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA** a un evento partidista convocado por la Coalición “Va Por México”, el 27 mayo de 2022, durante un proceso electoral en curso (2021-2022).

Ahora bien, es importante destacar que la conducta sancionable en dicho inciso, es acudir a un evento convocado por otro partido político durante los procesos electorales constitucionales de carácter municipal, estatal o nacional lo cual resulta en detrimento de las y los candidatos postulados por Morena, circunstancia que en el presente caso, se encuentra debidamente acreditada con sustento en los apartados desarrollados con anterioridad, en ese sentido, la conducta no versa respecto de determinar si tales actos trascendieron al resultado de la votación de manera cuantitativa o cualitativa.

Así entonces, la sanción que se impone atiende a la gravedad y circunstancias de la conducta acreditada, aunado a esto, a que como se indicó anteriormente, el supuesto que se actualiza para esta sanción que es la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA**, es y taxativo, por lo que sería inconstitucional agregar elementos que no contiene la norma.

Así, con sustento en lo desarrollado en la presente resolución que han sido explicados a lo largo de la presente resolución, es que se puede concluir que con la conducta infractora desplegada por la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA** transgredió el contenido de los

artículos 2 inciso a).; 3 inciso i); 6 inciso f), e i) y 9 del Estatuto, así como la Declaración de Principios, puesto que cometió actos que implican apoyar a un candidato postulado por partidos políticos coaligados distintos a Morena al acudir a un evento convocado por la Coalición “Va Por México”, esto es, una coalición de la cual no fue partícipe Morena en el pasado proceso electoral 2021-2022 en el Estado de Durango.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso, en este sentido, se estima que la sanción consistente en la cancelación de la afiliación a Morena de la denunciada que implica la pérdida definitiva de los derechos y obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General de Partidos Políticos, prevista en el artículo 129, en relación con el supuesto previsto en el inciso g) del Reglamento de la CNHJ, es la **adecuada para inhibir este tipo de conductas.**

Siendo así, se precisa que el derecho de asociación encuentra sus límites, en el contexto del derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, cuando las conductas de la militancia se encaminan, junto con otros actos o conductas realizados, a impedir que el partido cumpla con sus fines o a obstaculizar el ejercicio de sus derechos, ya que, en principio, podría establecerse que se violenta el derecho de asociación del resto de la militancia.

Por ende, la conducta desplegada por la denunciada excedió los límites del derecho de asociación con que cuenta, ya que su conducta consistente en asistir a un evento convocado por otra fuerza partidista, siendo diputada de este partido político, actuar que fue difundido por diversos medios de comunicación, no sólo tuvieron como efecto desprestigiar la imagen del partido y a su entonces candidata a la Gubernatura, sino que, además benefició la candidatura al referido cargo de otro instituto político y de esta manera obstaculizó de manera directa, nuestro máximo fin consistente en lograr una Transformación y un Cambio de Régimen.

De tal manera, que esta decisión no vulnera el principio constitucional pro persona, ya que parte de una interpretación que, por un lado, privilegia el derecho de asociación de los demás militantes de Morena y, por otro lado, se armoniza con los fines constitucionales de este partido político.

La sanción impuesta tiene como fin, proteger la vida interna del partido, la unidad del mismo, así como privilegiar los fines superiores de Morena, por lo que como ya quedó indicado en párrafos anteriores, esta Comisión considera que la sanción máxima es la

adecuada para inhibir el tipo de conductas como la cometida por la C. Marisol Carrillo Quiroga.

Efectos

Al haber resultado **GRAVE ESPECIAL** la falta cometida por la ciudadana Marisol Carrillo Quiroga, se le sanciona con la cancelación del registro como Protagonista del Cambio Verdadero de Morena, en apego al contenido del artículo 129 inciso g) del Reglamento de la CNHJ, lo que implica la imposibilidad jurídica y material de ejercer, dentro de Morena, y por lo tanto la separación de sus derechos contemplados en el Artículo 5º y demás contenidos en el Estatuto.

Es por lo anterior que se instruye a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, para que a la brevedad y en el ámbito de sus atribuciones, cancele el registro de afiliación de la **C. MARISOL CARRILLO QUIROGA** del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de Morena; Título Octavo (artículos 26 al 36), y 127 del Reglamento de la CNHJ; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

R E S U E L V E

PRIMERO. Se califica como **GRAVE ESPECIAL** la falta cometida por la ciudadana Marisol Carrillo Quiroga, en los términos de lo expuesto en esta Resolución.

SEGUNDO. Se **CANCELA EL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA DE LA C. MARISOL CARRILLO QUIROGA.**

TERCERO. **Notifíquese** la presente Resolución a las partes, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

CUARTO. **Publíquese** la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por **UNANIMIDAD** las personas integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”



DONAJÍ ALBA ARROYO
PRESIDENTA



EMA ELOÍSA VIVANCO ESQUIDE
SECRETARIA



ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES
COMISIONADA



ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ
COMISIONADO



VLADIMIR M. RÍOS GARCÍA
COMISIONADO